

Cuba: los requisitos de la competencia de la economía global

Guillermo Gortázar

(Intervención en el seminario "Cuba y la Unión Europea".
La Habana, 16 de noviembre de 1995)

DESEO AGRADECER A LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS y a los Patrocinadores de este seminario la invitación para participar en esta sesión de hoy en La Habana, con el título genérico de "Cuba en el nuevo orden internacional".

¿En qué consiste este nuevo orden? Básicamente en la libre competencia de una economía global. Además de principios y valores a los que más tarde me referiré, lo que ahora me interesa resaltar es el hecho de la transformación esencial que supone la globalización de la economía. Hoy los estados nacionales son muy pequeños e incapaces para intentar imponer a sus ciudadanos ciertas condiciones que resulten no competitivas, tales como elevados impuestos o condiciones de producción inseguras, inestables u onerosas. El capital viaja por todo el planeta sin limitaciones y se instala allí donde recibe mayor seguridad y mejores condiciones de negocio. Y esto sirve tanto para el capital financiero como para el capital industrial y humano.

Hoy la economía, el capital financiero, la industria, los bienes y servicios tienen más capacidad que los gobiernos para definir políticas realistas y operativas. Dejenme ponerles un ejemplo.

En un reciente seminario sobre el futuro de la Unión Europea en Madrid, con asisten-

cia del Presidente del Gobierno español, D. Felipe González, el profesor italiano de Ciencia Política, Carlo Pelanda retó al Sr. González a manifestar abiertamente su intención y deseo de unir la peseta a la moneda única europea en un plazo definido. Pelanda espetó textualmente al Presidente que no era capaz de hacerlo puesto que si hacía eso, en ese momento, los operadores financieros de todo el mundo venderían esa divisa cayendo en picado su cotización. "Si esto es así, ¿me quiere decir quien manda en la nueva economía global, usted o el mercado?".

Creo que la anécdota viene a cuento por cuanto pone a los políticos, a los líderes políticos, en un papel mucho más humilde y limitado de lo que se ha venido creyendo.

El nuevo orden internacional es un nuevo equilibrio entre las soberanías nacionales, territoriales, y la soberanía de los ciudadanos de la economía global. Los estados nación surgieron para garantizar seguridad y desarrollo en un ámbito territorial delimitado por las fronteras. Las guerras, los tratados y el derecho internacional fueron expresión e instrumentos de la concurrencia entre las naciones entendida en términos de lucha por la hegemonía.

Hoy la hegemonía no es el resultado de una superioridad militar sino de la capacidad tecnológica y de las mejores posiciones

en la economía globalizada. El siglo XX ha demostrado la imposibilidad de un imperialismo hegemónico, lo cual ha costado la dura lección de dos guerras mundiales y largas décadas de tiranía del comunismo sobre más de la mitad de la humanidad. A diferencia del siglo XX, el siglo XXI se anuncia como el escenario de una dura batalla económica entre los ciudadanos del mundo, a la vez pacífica y generadora de progreso y bienestar.

¿Quiere esto decir que los estados nación han perdido por ello su operatividad, su sentido histórico? En absoluto. Esto quiere decir que los estados, que los sistemas políticos, deben ser conscientes de esta nueva realidad y facilitar el ámbito de competencia de su territorio, de su soberanía, para ganar posiciones de sus ciudadanos e instituciones en la economía globalizada. Por ello, la competencia en el nuevo orden internacional se plantea en un doble nivel: por un lado los ciudadanos globales entre sí y por otro los antiguos estados nación entre sí tratando de ofrecer los ámbitos más favorables para la inversión y la producción.

Y es que los mercados castigan duramente la inseguridad, la inestabilidad y los altos costes agregados a los productos por la sencilla razón de que es relativamente fácil encontrar otros ámbitos territoriales que ofrezcan seguridad, estabilidad y menores costes. En los países en los que la estabilidad y seguridad se da por garantizada, los costes son el dato fundamental: por eso los políticos tienen tantas dificultades en aumentar los costes generales (seguridad social, salarios, impuestos, etc.). Llega un momento en que el país “no es competitivo” y en vez de ser un reclamo de inversión internacional se convierte en una zona de expulsión de capitales. En el nuevo orden internacional, Cuba posee todos los elementos estructurales necesarios para ser altamente competitiva en productos agrícolas especializados, en turismo, en nuevas industrias y

como centro estratégico de toda América, resultado de su privilegiada ubicación y de su tradición histórica. Sus ciudadanos, con elevados niveles de educación e iniciativa, han demostrado que, en condiciones de libertad e igualdad, son capaces de superar y ganar posiciones allí donde se han instalado a pesar de las dificultades de idioma o de integración.

Cuba, el pueblo cubano, lejos de su tradición de economía abierta y competitiva, ha sido durante treinta años una víctima más de la economía no competitiva y subsidiada por la URSS. Con el derrumbe del comunismo, el Gobierno de la República trata de variar su modelo económico sobre la base de su integración y abierta competencia en los mercados internacionales. Desde hace tres o cuatro años las llamadas a la inversión en la Isla han chocado con la desconfianza e inseguridad de los inversores salvo en los casos en los que la rentabilidad y desproporción de condiciones en relación con otros mercados han compensado a algunos empresarios a realizar ciertas inversiones, sobre todo en el sector turístico.

El Gobierno de Cuba puede realizar reformas económicas en la única dirección posible: es decir, preparar a su país para que se desenvuelva en la nueva economía global. Pero muy a nuestro pesar observamos que las limitaciones y desconfianzas son mayores que el ritmo y alcance de las reformas necesarias. El Gobierno de Cuba ha creado una economía paralela del dólar, a la que sólo tienen acceso los extranjeros y una minoría privilegiada de la sociedad cubana. Con ello se limita el sentido profundamente moral que tiene el capitalismo de igualdad de oportunidades (a diferencia del socialismo) a la vez que se crea una suerte de “apartheid”, percibida y vivida muy intensamente por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cuba, ajenos a los beneficios derivados de la apertura económica.

Señoras y señores, se puede decir más alto pero no más claro: para ese viaje no cuentan con el Partido Popular de España. Nos negamos a dar una imagen de nuestro país, con el dinero de los contribuyentes españoles, de aprovecharnos de una situación de dificultad del pueblo de Cuba. El postcastrismo llegará y queremos decir bien a las claras que nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Cuba es ilimitado pero no queremos contribuir en absoluto a prolongar un sólo día más la situación de excepcionalidad que vive esta República.

De forma insistente el Gobierno socialista español defiende que conviene favorecer el desarrollo económico de Cuba como preámbulo necesario para la transición política. Créanme que si hubiéramos comprobado que esta tesis tenía razón, se confirmaba en los hechos, el PP, yo mismo, me habría convertido en un apóstol del levantamiento del embargo y habríamos aconsejado las inversiones en este país a cuantos agentes y empresarios nos han venido a preguntar. Pero frente al mundo de los deseos se encuentra el mundo de las realidades. Cuatro años después del desembarco en La Habana de algunos inversionistas españoles y de otros países, las cárceles cubanas retienen cientos de presos políticos, los grupos de disidentes políticos son permanentemente hostigados, y por si fuera poco el señor Castro nos recuerda en su reciente entrevista de Telemundo que no tiene la más mínima intención de iniciar un cambio político: "Yo no creo en la democracia representativa, ni en los partidos políticos. En Cuba tenemos un buen sistema de gobierno y no veo necesidad de cambiarlo. En Cuba los políticos de mi generación son contrarios al multipartidismo".

Señoras y señores, el Partido Popular forma parte del grupo más influyente del Parlamento Europea y está próximo, a juz-

gar por los sondeos, a ser el próximo Gobierno de España en el plazo de apenas tres meses. Nuestro convencimiento es que el origen de las dificultades económicas de Cuba se encuentran sólo en una dimensión política que se resuelve iniciando una transición a la democracia, a las libertades plenas. Deseamos que esa transición sea pacífica, sin revanchismos, asistidos por el valor necesario e insustituible de la reconciliación nacional y con el más amplio acuerdo posible entre todos los cubanos sean residentes o no en la Isla.

El más firme deseo del Partido Popular es que se confirmen las previsiones y promesas hechas por el Gobierno socialista de España de inicio de cambios significativos en Cuba. No estamos planteando un intercambio de apoyo político por la liberación de "algunos" presos. Ese no es el camino con el que se va a contentar la opinión pública española y europea ya que es evidente que la cantera de nuevos candidatos a ingresar en la cárcel es ilimitada. Hoy es necesario un gesto político de calado. Por eso uno y alzo mi voz junto con cuantos dentro y fuera de la Isla están pidiendo la amnistía. El Partido Popular apoyará un acuerdo Cuba-UE tan pronto como sea concedida la amnistía y se proceda a la reforma del Código Penal de modo que abandonen las cárceles los presos llamados de conciencia cuyo único delito ha sido intentar ejercer derechos básicos reconocidos en la Declaración de Derechos del Hombre.

Cuba tiene ante sí un futuro abierto y prometedor. La grandeza de los líderes políticos se encuentran en preparar y consolidar los caminos de unión y de reconciliación nacional. Y una vez conseguida ésta, comprender que el mundo del siglo XXI exige a cada nación poner todos los medios para el pleno ejercicio de la nueva soberanía de los ciudadanos libres en la economía global.